

Control empresario y resistencia obrera durante la última Dictadura militar argentina. Los casos de las industrias metalúrgicas y del cemento

Daniel Dicosimo

Instituto de Estudios Histórico Sociales (IEHS)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)

ARGENTINA

daniel.dicosimo@speedy.com.ar

Resumen:

La Dictadura argentina de 1976 a 1983 se caracterizó por un gran esfuerzo disciplinador, dirigido a neutralizar un sector popular organizado y activado políticamente. El uso de la violencia, la coerción y la intervención de los sindicatos alteraron la relación de fuerzas en las fábricas a favor de los empresarios, facilitando a éstos recuperar y consolidar el control sobre la producción. La resistencia obrera y sindical apareció inmediatamente, con rasgos defensivos y fragmentarios. En esta ponencia se estudiarán las formas menos conocidas de la resistencia, aquellas no explícitas ni frontales, sino las “difusas”, “discretas”, no militante, ocasional y parcial, como el sabotaje y otras.

Palabras clave: Resistencia; Control; Dictadura; Conflicto; Indisciplina.

NOTAS SOBRE EL CONCEPTO DE RESISTENCIA OBRERA

En los estudios históricos sobre la lucha obrera durante la dictadura, realizados desde la recuperación de la Democracia en la Argentina, es común encontrar una definición flexible de resistencia que comprende casi todas las formas de comportamientos no consensuales hacia las directivas empresarias y gubernamentales (Dicósimo, 2015: 71). En la mayoría de esos estudios todas las medidas de fuerza en el lugar de trabajo y en las calles, como las huelgas, el trabajo a reglamento y tantas otras, ya fueran tradicionales o nuevas, fueron incluidos en el término resistencia. Esta definición nos permite desmitificar dichas conductas, pero deja afuera alguna de ellas, como las actitudes propias del “escape” o la “obediencia condicionada”.

Si bien el concepto de resistencia no ha tenido en la Argentina nunca el carácter heroico que otras historiografías, como la francesa, le han atribuido, sí se ha privilegiado su uso para referirse a conductas activas de oposición a la Dictadura y a las directivas unilaterales de las empresas. Los autores que miraron el tema desde un enfoque contractualista e hicieron hincapié solo en la pérdida de derechos legales o adquiridos que sufrieron los trabajadores durante la dictadura, o los que adoptaron una perspectiva relacional del poder y se centraron en el reforzamiento del dispositivo disciplinario en el lugar de trabajo, todos han privilegiado la resistencia como reacción, contragolpe o, al menos, defensa activa.

Este predominio de las medidas de fuerza como sinónimos de la oposición obrera no es casual, ya que muchos de los investigadores no han considerado las actitudes pasivas de inconformismo o inadaptación al nuevo orden, y mucho menos han explorado si existió una “zona gris” entre la resistencia, entendida como contragolpe, y el consenso, entendido como aceptación de unas relaciones laborales autoritarias y de la extracción de la plusvalía por las empresas. Por “zona gris” entendemos todo un espectro de conductas y actitudes que expresaban rechazo, desacuerdo y desobediencia respecto de algunos de los principios y los métodos de la Dictadura militar y de los empresarios pero, aun así, lo hacían de modo “discreto”, no militante, ocasional y parcial, alternando con acuerdos, consentimientos e, incluso, identificación con otros aspectos del régimen.

En casi todos los estudios la resistencia aparece como una serie de intentos, exitosos o no, de construir un contra poder obrero en el espacio donde se impone el poder de la burguesía, el lugar de la producción. A nuestro modo de ver el análisis más elaborado y provocativo en ese sentido sigue siendo el de Pozzi (1988), en sus nociones de lucha por el control del proceso de trabajo y de relaciones de fuerza contrarias al poder. En su interpretación, el poder disciplinador del gobierno militar penetra hasta el espacio de la producción, donde

refuerza las prácticas tayloristas de la Organización Científica del Trabajo y es ahí donde se plantea una de las batallas más decisivas de la lucha de clases.

Por otra parte, en algunos análisis más recientes está presente la concepción relacional del poder de Foucault, según la cual el poder son relaciones de fuerza que producen a los sujetos, los dispositivos de poder prescriben conductas, adiestran los cuerpos y producen saberes (Barragán, 2013; Dicósimo, 2007). En los lugares de trabajo esos dispositivos actúan como un conjunto de métodos que permiten “el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad” (Foucault, 1989: 141). La violencia, que es inherente a todo orden productivo para imponer la obediencia de los trabajadores, está representada por la sujeción de los cuerpos.

La resistencia, en la concepción foucaultiana, es immanente al poder, “la resistencia y el poder se pertenecen mutuamente. El poder se pliega contra sí mismo, haciendo a la resistencia un elemento que lo constituye y hace posible, pero, por otro lado, que se contraponen a él” (Orellana, 2012: 162). La resistencia es una relación de fuerza que se opone activamente al poder dentro del orden productivo, es una lucha que busca abrir los dispositivos de la disciplina, que los niega. Pero ¿qué pasa cuando esas relaciones de fuerza son tan favorables a las empresas que reducen a la lucha, que desorganizan y debilitan el poder de la resistencia?

Al limitarnos a ver la resistencia solo como un contragolpe, es posible que esta se vuelva invisible en contextos de alto nivel de represión y bajo nivel de organización; pero quizá sea posible descubrirla si tenemos presente que Foucault pensaba la resistencia no solo como contragolpe sino también como un “escape”. Si el poder intenta captar los distintos elementos del quehacer social, la resistencia consiste en escapar a todo intento de captura; será un movimiento que pretende hacer caso omiso y ubicarse al exterior del poder: “Escapa de algún modo a las relaciones de poder; algo que no es la materia prima más o menos dócil o reacia, sino que es el movimiento centrífugo, la energía inversa, la escapada” (Foucault, 2008: 93).

La resistencia como “escape”, o quizá sería mejor llamarla “difusa”, no toma el carácter y la forma del conflicto laboral abierto, sino de otro fenómeno que podríamos conceptualizar como indisciplina o “infra política”, como la entiende James Scott: “una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de expresión” (Scott, 2004: 44). Entre las formas de la “infra política” están el discurso oculto, los rumores, las bromas y otras, que constituyen acciones invisibles o apenas públicas realizadas en contextos de elevada coerción y donde las instituciones que canalizan y procesan los conflictos no existen o están momentáneamente clausuradas. Esa invisibilidad, señala Scott, es en buena medida resultado de una acción deliberada, de “una decisión táctica que está consciente del equilibrio de poder”. Com-

plementaria a la noción de “infra política” es la de “artes de hacer”, propuesta por Michel de Certeau, que se refiere a las prácticas, procedimientos y ardidés de quienes están “atrapados en las redes de la *vigilancia*”, en las estructuras disciplinarias, y que tienden a crear dentro de las mismas un ambiente de “anti disciplina” que son su contrapartida. En un equilibrio de poder desfavorable y en un espacio que ha sido reconquistado por el otro, la táctica “es un arte del débil” (de Certeau, 1996: XLIV-XLV).

No está de más aclarar que lo dicho hasta aquí no equivale a considerar que, en el mundo real del trabajo, las actitudes propias del contragolpe o del escape se manifestaron separadas unas de otras, ni que el observador podrá encontrarlas aisladas y claramente diferenciadas entre sí. Por el contrario, lo común será que coexistan, se combinen y complementen en un mismo episodio de resistencia, por ejemplo es posible que los sabotajes de autor individual sean parte de un mismo proceso junto a los conflictos colectivos abiertos. Lo que intentamos aquí es una “disección” conceptual, una separación solo válida en el orden conceptual, de actitudes que en la realidad histórica forman parte de procesos dinámicos y complejos.

Asimismo si el carácter de la resistencia es “difuso” en algunas circunstancias, en otras se vuelve ambiguo: por ejemplo cuando aparecía en espacios productivos organizados según programas de incentivación del trabajo, a través de diversos medios como las primas y otros, que tenían el consentimiento de los trabajadores. En esos casos podía desarrollarse un interés particular por la continuidad de esos programas, basado tanto en los beneficios económicos del aumento de la productividad como en una serie de valores derivados de la experiencia del taller, entre los que podemos mencionar el aprecio por la destreza y la resistencia física, el cumplimiento de metas, el orgullo de dominar los secretos de operaciones en apariencia simples, entre otros.

Participar en este tipo de trabajo se convertía en un fin en sí mismo y, como ha señalado Michel Burawoy, generaba un espacio de acuerdo con la empresa respecto a las pautas de aumento de la productividad (Burawoy, 1989). No obstante, esto no significa que los trabajadores otorgaran consenso a la apropiación del trabajo no retribuido por los empresarios, lo que marca la diferencia entre consentimiento y consenso, ni para introducir cambios unilaterales en los programas de incentivos. Por el contrario, el conflicto reaparecía cada vez que los trabajadores involucrados veían disminuir su control sobre las condiciones que les permitía cumplir las cuotas complementarias y obtener las primas correspondientes.

Por último, un espacio laboral donde la resistencia es esquiva a la observación del historiador lo constituyen aquellos procesos de trabajo organizadas según los principios y las prácticas del paternalismo industrial. Este suele elaborar una imagen según la cual sus relaciones laborales son armoniosas pero amenazadas por peligros externos, por lo tanto se desarrollan en espacios so-

cial y materialmente cerrados (Neiburg, 1988). A simple vista no hay conflictos entre trabajadores y empresas, y el sabotaje es uno de los cabos sueltos que asoma en ese mundo idealizado de la “gran familia”; como indicador de las tensiones y los conflictos que la agitaban, no podemos menospreciarlo (Dicósimo y Carminati, 2013).

El sabotaje durante la última dictadura ha sido poco estudiado en comparación a otras formas del conflicto; el libro de Pozzi es pionero en considerarlo una de las múltiples formas de la resistencia. Se puede diferenciar los sabotajes de las otras medidas de fuerza, siguiendo la conceptualización de Edwards y Scullion, porque en estos casos, que denominamos “conflictos abiertos”, el conflicto es reconocido por todos los participantes y se toma una acción para expresarlo, mientras que en los sabotajes, clasificados por esos autores como “conflictos no dirigidos”, hay una conducta concreta pero ésta no es abiertamente conflictiva, o sea no hay motivos ni autores explícitos (Edwards y Scullion, 1987). Al mismo tiempo es una de las formas de conflicto más difíciles de analizar, debido al sesgo con que las fuentes lo mencionan: expresión de una resistencia heroica para las publicaciones militantes, ecos de la amenaza de la “guerrilla industrial” para los periódicos comerciales, registro de la preocupación patronal por la persistencia de elementos “perturbadores” para la producción en los informes policiales, escaso reconocimiento en los testimonios obreros, etc.

Ante las dificultades teóricas y empíricas para caracterizar al sabotaje es importante tener en cuenta el contexto en el que se produce, entendiendo por este no solo la particular organización del trabajo de la fábrica o el taller, sino también la coyuntura política, social y económica y la estructura social, en particular lo que concierne a las relaciones sociales y a la organización sindical vigentes en el lugar de trabajo. Los sabotajes no expresaron sentimientos de frustración o desesperación, originados en la incapacidad para adaptarse al sistema industrial, sino formas de acción sindical alternativas a las que habían sido propias del conflicto abierto e institucionalizado, antes del Golpe de Estado de 1976.

LA RESISTENCIA “DIFUSA”

En este apartado nos referiremos a la resistencia obrera en las ramas metalmeccánica y del cemento en el Gran Rosario y el cordón industrial del río Paraná, y el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires, durante los años más duros del “Proceso”. Como ya señalamos, nos interesa ver la resistencia en su dimensión menos estudiada, la que, siguiendo la perspectiva foucaultiana, comprende las acciones no consensuales y en cierto modo centrífugas al poder patronal, es decir las de la indisciplina o la infra política. En particular

haremos referencia a tres aspectos de esa resistencia “difusa”: la creación de un “ambiente” de anti disciplina, las “acciones tácticas” y los sabotajes.

La reconstrucción de los dos primeros aspectos de la indisciplina debe superar el problema de que no sólo eran esquivos a los dispositivos de control sino también a la observación y medición de la administración del trabajo, las fuerzas de seguridad y la prensa, es decir que resulta difícil rastrearlos a través de las fuentes escritas tradicionales y los testimonios orales pasan a un primer plano. Es evidente que la reconstrucción exige, necesariamente, comenzar por una escala micro; la nuestra, por lo menos para el “ambiente” de anti disciplina y las “acciones tácticas”, es un estudio de los conflictos en Metalúrgica Tandil, una de las empresas autopartistas más importantes del mercado nacional en el período.

A mediados de diciembre de 1976 fue anunciada la visita protocolar a la planta de Metalúrgica Tandil del teniente general Videla, Presidente de la Nación designado por la Junta de Comandantes en Jefe que había protagonizado el Golpe de Estado del 24 de marzo. El evento estuvo precedido por un clima de tensión y temor por su seguridad, debido a la circulación de rumores acerca de que el visitante podía recibir una lluvia de cascotes de tierra de “noyos” cuyos autores serían difíciles de detectar y neutralizar.¹ Esta anécdota es significativa porque la figura de Videla, personificación de un régimen político que se había constituido para vigilar y disciplinar a la sociedad, no podía evitar que se generara un “ambiente de anti disciplina” que desafiaba un estricto operativo de seguridad, es decir, una contrapartida de las estructuras disciplinarias que aquél se proponía reforzar desde el Estado.

También es interesante la posible relación entre ese clima de tensión y temor por la seguridad del visitante y los rumores de atentados contra él. El rumor es una poderosa forma de comunicación anónima que, como ha señalado Scott, puede servir a intereses muy específicos. En una situación de expectativa por los cambios que el reciente Golpe de Estado había generado en la clase trabajadora, no es extraño que prosperaran los rumores, más aún cuando la presencia de Videla, por razones de seguridad, estuvo rodeada de cierto hermetismo. La información ambigua y escasa sobre su visita contribuiría a que el personal de la empresa abriera sus oídos a los rumores y los repitiera rápidamente. La forma en que los rumores se elaboran, distorsionan y exageran hacen imposible identificar a sus autores, y esto lo confirma la ausencia de noticias sobre sanciones disciplinarias luego de la visita, pero además ese proceso de alteraciones que sufren durante su transmisión los hacen conformarse a las esperanzas, temores y visión del mundo de quienes los escuchan y reproducen. Por lo tanto su aparición en esa circunstancia nos sugiere que entre quienes recibieron a Videla había sentimientos opuestos de expectativa de mejoramiento en las reglas del juego del sistema industrial y

de resentimiento por haber sido artífice de la interrupción de un proceso de cambios más profundos.

En situaciones menos extraordinarias y visibles que esa visita existieron “acciones tácticas” en el sentido de M. de Certeau, a lo largo del período 1976-1983. Pudimos identificar, gracias a diversas fuentes escritas y orales, al menos cuatro tipos de esas acciones: burlas hacia el personal jerárquico, autorregulación del esfuerzo de trabajo, auto laceración, vagabundeo y “robo” del tiempo productivo:

1) Bromas y agresiones: eran habituales en cualquier trabajo repetitivo y agotador como el de la industria metalúrgica y la del cemento, donde las tareas manuales y las intelectuales estaban divididas. Con frecuencia los compañeros de una sección bromeaban entre sí sobre los resultados de un partido de fútbol, expresando su enojo o su alegría con gritos y corridas, o jugaban a tirarse terrones de arena o restos de “noyos”. Sin embargo, en las fuentes es difícil distinguir entre bromas y agresiones: en abril de 1976 un operario fue despedido de Metalúrgica Tandil por lesionar a un compañero de sección, a quien había tirado un cascote de “noyo” con una honda. Estas conductas perseguían el propósito de combatir el aburrimiento, la incomunicación y la parcialización del trabajo con actitudes a veces inocentes, pícaras e inmaduras, propias de una mano de obra joven y en gran parte proveniente del mundo rural.

También ocurría que las bromas pesadas estuvieran dirigidas al personal jerárquico, desde los capataces a los jefes de sección, a quienes se mostraba en son de burla la foto del equipo de fútbol rival al de sus preferencias o se le llenaba de yerba y papeles el casco reglamentario olvidado en el vestuario. Los chistes o las burlas anónimas, como esa última, podían significar algo más que una forma de entretenimiento. En particular las bromas hacia el personal jerárquicos podían constituir un desafío oculto, una forma invisible de negar deferencia a la autoridad de la empresa, que se manifestaba a través de ellos. Tenían a su favor el anonimato que, como sucede con toda forma de la cultura oral, es posible debido a que sólo aparece de modo fugaz. Como señala Scott la ventaja de la comunicación oral es que el transmisor controla los factores de su difusión: el público, el lugar, las circunstancias, la interpretación, y “el ámbito de la conversación privada es el más difícil de infiltrar, incluso para el aparato policial más persistente” (Scott, 2004: 194).

Además de las burlas, la autoridad empresaria era desafiada más visiblemente a través de diferente tipo de actitudes violentas contra el personal jerárquico. En los informes disciplinarios presentados por Metalúrgica Tandil en la justicia del trabajo durante los juicios en su contra, por despidos y suspensiones a miembros de su personal, encontramos una lista de esas actitudes: invitación a pelear para saldar algún tipo de agravio, respuestas airadas y degradantes, palabras obscenas dichas a viva voz, calificativos injuriosos, amenazas

de agresión física, etc.; si la simple burla a un capataz era considerada por la empresa una injuria y merecía una suspensión, las agresiones eran el mayor desafío al dispositivo disciplinario que el ataque a quienes debían imponer la disciplina. Era una forma muy peligrosa de insubordinación porque, en palabras de Scott, “un acto único de insubordinación pública exitosa perfora la superficie uniforme del aparente consenso, que es un recordatorio visible de las relaciones de poder subyacentes” (Scott, 2004: 242).

2) Autorregulación del tiempo de trabajo: eran prácticas oportunistas que desafiaban la cadencia impuesta por líneas o carruseles. Por ejemplo, en la sección Moldeo de Metalúrgica Tandil los operarios introducían un sistema de relevos sin pedir autorización del jefe de sección y los capataces, abriendo pausas informales para el descanso; las tareas de recuperación de piezas, cajas y tierra eran realizadas por tres parejas de operarios que rotaban cada media hora en los diferentes puestos, quienes acordaban que en cada pareja uno trabajaría mientras el otro descansaba quince minutos y viceversa. En las líneas de la sección Rebaba, un acuerdo similar permitía que los operarios dejaran su puesto para sentarse e incluso dormir unos minutos en el baño. Muchas sanciones disciplinarias, por el cargo de “abandono injustificado del puesto de trabajo”, fueron aplicadas en esas circunstancias.

3) Auto laceraciones: en Rebaba aumentaron, durante 1979 y 1980, las licencias por accidentes en el uso de herramientas. En realidad muchas eran auto laceraciones, producidas por el abandono premeditado de los anteojos protectores y auto aplicación de golpes. En última instancia se buscaba un descanso ante el aumento de la carga laboral, que había generado la eliminación parcial del régimen de jornada reducida por insalubridad y la extensión de la jornada a nueve horas.

4) “Robo” del tiempo productivo: en el caso de Metalúrgica Tandil, sus autores pertenecían a la sección Herramental, es decir, trabajadores muy calificados encargados de elaborar los modelos de las futuras piezas y las herramientas de precisión; un taller donde hubo activismo gremial pero también orgullo profesional y cierto desprecio al área de producción. Antes de 1976, los modelistas presionaron duramente a la patronal y consiguieron beneficios sectoriales, pero el cambio en las relaciones de fuerza dentro de la planta, la caída de la producción y la transferencia de esas tareas a empresas subsidiarias terminaron con sus privilegios. Esta práctica parece una reacción a estas nuevas condiciones de trabajo, un acto de cinismo que había estado latente bajo una condición privilegiada y que emergía como resultado de su pérdida.

Por último nos referiremos a los sabotajes, que incluimos en la resistencia “difusa” por su carácter de “conflictos no dirigidos”, siguiendo a Edwards y Scullion (1987), es decir en ellos hay una conducta concreta pero no es abiertamente conflictiva, o sea no hay motivos ni autores explícitos. En este caso ampliaremos la escala de análisis a lo regional, porque las fuentes existentes,

como los informes de inteligencia de las policías provinciales, la prensa comercial y la militante, nos permiten trazar un panorama mayor al de las empresas particulares. Junto a Andrés Carminati estudiamos recientemente los sabotajes en dos regiones industriales diferenciadas entre sí, el Gran Rosario y el cordón industrial del río Paraná y el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires,² y aquí nos basamos en parte de los resultados que obtuvimos en dicha investigación (Dicósimo y Carminati, 2015).

En la región del Gran Rosario y el Cordón Industrial del Paraná, los sabotajes tuvieron una presencia significativa durante dos momentos signados por la alta represión, la racionalización laboral y los despidos, características que influyeron negativamente sobre la forma que adoptaron los conflictos sociales. En el primero de ellos, entre marzo de 1976 y junio de 1977, predominaron los efectos de la virulencia represiva que castigó a los trabajadores de la región. Esta había comenzado con el denominado “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, iniciado en marzo de 1975, y castigaba en particular a organizaciones, militantes y activistas de las izquierdas. En ese contexto de reflujo la conflictividad presentó rasgos “moleculares”: estallidos breves, localizada en los lugares de trabajo, dispersión y falta de coordinación con otros centros laborales. El registro de nueve sabotajes es el más alto de los dos períodos en los que estos tuvieron una presencia notoria.

No es mucho menor el registro de sabotajes en el segundo período, entre enero y diciembre de 1978. Aunque la prensa comercial de la época quiso presentarlo como un año de relativa “calma laboral”, que reflejaría tres aclamados triunfos del gobierno militar, como la derrota de la “subversión”, el aparente control de la inflación y la organización del Campeonato Mundial de Fútbol, los conflictos existieron pero con una tendencia al aislamiento y la dispersión. Los sabotajes registrados son siete. Por contraste, la visibilidad de los sabotajes es mucho menor durante la coyuntura en que las “olas de huelgas” se manifiestan en la región: junio de 1977 y octubre-noviembre de 1979, y en que la dictadura experimentó el inicio de su agotamiento y descomposición, del año 1980 en adelante, con la ya inevitable normalización sindical. Se registra solo un sabotaje por cada coyuntura.

La reconstrucción y análisis de los sabotajes debió superar el problema de la inexistencia de series continuadas y completas de fuentes. Para el período que va desde el Golpe de Estado a junio de 1977 se contó con numerosa información de las publicaciones de dos organizaciones político-militares con importante incidencia en la región, como fueron el PRT-ERP y Montoneros; pero hacia 1977 la militancia de ambas organizaciones había padecido las consecuencias del Terrorismo de Estado. A pesar que las estructuras partidarias subsistieron formalmente algunos años más, ninguna de las dos mantenía una capacidad organizativa que les permitiera mantener un órgano de prensa regular ni inserción en los lugares de trabajo. Por lo cual la información sobre

los hechos de sabotaje producidos hacia 1978 proviene mayoritariamente de los Partes Policiales (PP) alojados en el Archivo de la Memoria de la Provincia de Santa Fe (AMPSF).

En los apartados siguientes desarrollaremos brevemente algunos de los episodios de sabotajes, en general asociados más o menos claramente a conflictos abiertos. En Rosario, durante los primeros quince meses de la dictadura militar hubo distintas modalidades de protesta: trabajo “a tristeza” en octubre del ‘76 y movilizaciones por la ciudad con asambleas en los lugares de trabajo durante febrero del ‘77. Mientras que en el Puerto de Rosario entre enero y febrero del ‘77 –en consonancia con las medidas de fuerza que habían sucedido en el puerto de Buenos Aires– se produjeron varios enfrentamientos consistentes en formas de “trabajo a reglamento” y paros sorpresivos. El 9 de febrero la prensa local informaba de “un caso insólito y que nunca se habría registrado en nuestra ciudad... se *rajó* un silo comenzando a perder trigo que se encontraba allí almacenado”.³ Al parecer, la conflictividad de estos meses desembocó en este indudable hecho de sabotaje.

El resto de los conflictos que se pudieron recuperar son breves escaramuzas, donde predominan las acciones de “trabajo a desgano”, “quite de colaboración” y distintas formas de protesta en los lugares de trabajo. En algunos casos estas protestas fueron acompañadas con hechos de sabotaje de distinto alcance. Un caso que se vincula directamente a la conflictividad es el del sabotaje sobre un grupo electrógeno de la planta de tractores John Deere, que se produjo en el momento en que entraba “un escuadrón militar para sofocar una huelga que llevaba 48 horas” (Bascheti, 2001: 307). Mientras que en el frigorífico Swift de la Zona Sur de Rosario hubo otro hecho relevante: “toneladas de las mejores carnes argentinas destinadas a ser embarcadas para la exportación, quedaron inutilizadas al ser pinchadas las cámaras frigoríficas que las conservaban”.⁴ Similar es el caso de la metalúrgica Metcon de Villa Constitución, donde el jefe de protección de la planta denunció un incendio intencional sobre unos “cajones con máquinas importadas”. Si bien el incendio no alcanzó grandes proporciones, aparentemente se halló “una caja de lata con un ovillo de hilo sisal y un dispositivo que lo conectaba a una lata de nafta”, que indicarían que el hecho fue intencional.⁵

En el período comprendido por el segundo semestre completo de 1977, donde se producen dos grandes “olas de huelgas”, se ha registrado otro hecho de sabotaje que claramente está relacionado con una coyuntura de conflictos abiertos. Se produjo en la Cerámica San Lorenzo, en el Cordón Norte de la Ciudad de Rosario, donde se había producido un conflicto por reclamos de mejoras salariales durante el cual la totalidad de los trabajadores allí empleados adoptaron “una actitud de brazos caídos”. La patronal de dicha empresa denunció el hecho ante el Ministerio de Trabajo y al parecer se manifestó reticente a la negociación. A los 3 días de iniciada la huelga de brazos caídos

se produjeron varios hechos de sabotaje contra las instalaciones fabriles. La empresa denunció la “rotura de ocho prensas utilizando para tal fin tuercas, restos de azulejos y biscochos (azulejos en proceso de elaboración)”.⁶ Si bien “no se detectó cabecillas [...] dirigentes o agitadores”, el conflicto culminó con el despido de 25 obreros y la detención de los 13 trabajadores a cargo de las prensas saboteadas.

Entre enero y diciembre de 1978, un período de escasos conflictos abiertos, hubo gran cantidad de hechos de sabotaje; lo distintivo, además, es el registro de varios hechos en un mismo establecimiento a lo largo del año. Es el caso de la planta Celulosa Argentina, en la localidad de Capitán Bermúdez donde, en el mes de abril, fueron saboteadas las “máquinas fabricadoras de papel, hecho que fue perpetrado arrojando en el interior de las mismas bulones que produjeron la inutilización de las mismas”.⁷ Según la información que recogían los partes diarios de la Policía de Santa Fe, y que podría dar algunos indicios sobre el hecho: “los obreros de Celulosa Argentina estaban en conocimiento de futuros despidos masivos de personal”. La empresa tuvo que autorizar una asamblea en la fábrica, “que fuera solicitada por el sindicato Químico-Papelero, de la que participaron de 2.000 a 2.500 obreros”. A las dos semanas la policía encontró un panfleto titulado “Reestructuración en Celulosa”, donde se señalaba que el malestar obrero se debía a las “medidas adoptadas por la empresa [...] las cesantías, suspensiones, falta de horas extras, etc.”. Asimismo, en el panfleto se explicitaban algunas demandas obreras: como “normalización sindical a corto plazo, convocatoria a paritarias, salario mínimo de 18 millones moneda nacional... basta de cesantías, reincorporación de los cesantes, libertad de los presos gremiales”. Quince días después se produce otro hecho. Esta vez un incendio en la Sección Maderas, Rechazo de Papel y Depósito de Papel. Para octubre del mismo año se produce un tercer hecho en la misma fábrica: “se le arrojó un trozo de asfalto” a una máquina lo que ocasionó la pérdida de 18 toneladas de papel.

Llegados a este punto podemos establecer algunos patrones comunes respecto a las posibles causas de los sabotajes. Al parecer existe una relación estrecha entre estos hechos de sabotaje y la represión sobre los trabajadores y sus organizaciones. La imposibilidad de canalizar el conflicto obrero-patronal por las vías tradicionales de la huelga y la negociación habría empujado a los trabajadores a tomar este tipo de medidas. Frente a un panorama que tenía como norma la ilegalización de las huelgas, la intervención de la policía o el ejército en las plantas y los despidos de los supuestos cabecillas, emergieron este tipo de medidas que, desde el anonimato, afectan de otra forma la producción: inutilizándola, retrasándola o dañando de alguna forma las mismas instalaciones fabriles. En los casos que las fuentes disponibles nos han permitido reconstruir el contexto más cercano de los hechos, hemos hallado una

conexión entre el sabotaje y un contexto de conflictividad entre obreros y patronos, lo cual reafirma lo que venimos señalando.

Diferente es el caso de algunos sabotajes registrados en los dos primeros años, que pueden atribuirse a las tácticas de las organizaciones político-militares que estimulaban su realización. Tanto el PRT-ERP como Montoneros, que tenían importante inserción en la región, alentaban a sus militantes, simpatizantes y trabajadores en general a producir hechos de sabotaje, a la vez que se adjudicaron como propios algunos de dichos actos.⁸ No obstante, nos parece que no hay que sobredimensionar este aspecto. El sabotaje tenía su antecedente histórico-político en la denominada “resistencia peronista” y, por consiguiente, formaba parte de la *experiencia* de la clase trabajadora argentina. La extensión del fenómeno, su diversidad de formas y de lugares nos parece que da cuenta de ello. Es por demás sugerente que cuando se producen períodos de reflujo en la conflictividad abierta, bajo un contexto caracterizado por un ambiente represivo, donde se venían produciendo reorganizaciones de las tareas en las plantas, aumento de la productividad, despidos arbitrarios, falta de reconocimiento de representantes de los obreros, se produzca, como una forma de respuesta, el sabotaje.

En el centro sudeste de la provincia de Buenos Aires los sabotajes siguieron un patrón semejante a la otra región, ya que constituyen reacciones al ajuste del empleo, a los ataques a la organización sindical y los cambios unilaterales de la organización del trabajo, sin que hubiera una mediación institucional o el reconocimiento de las empresas. Aquí pudimos reconstruir cinco casos, dos de ellos ocurrieron en el momento inmediatamente posterior al Golpe de Estado, momento de reflujo y derrota obrera-sindical, uno durante el año 1978, de “calma laboral”, aislamiento y dispersión del conflicto abierto; y los últimos dos a comienzos del año 1979, en un período de crecientes expectativas por la organización del primer paro general del “Proceso”.

En la industria metalmeccánica de la ciudad de Tandil han quedado registrados dos actos de sabotaje, uno de ellos realizado el 8.04.1976 en Metalúrgica Tandil contra una máquina, que interrumpió la producción por unas horas. La policía intervino ante la denuncia de la empresa y detuvo a 15 operarios por supuesto “boicot laboral”, de los cuales liberó a 14 al día siguiente mientras continuaba la investigación. Un mes más tarde la firma Ronicevi, otra de las grandes fundidoras y autopartistas de Tandil, denunció “daños intencionales” en el guardarropa, los vestuarios y los baños de la Sección Mecanizado.

Estas acciones, teniendo en cuenta el contexto histórico, parecen haber constituido reacciones de malestar al disciplinamiento, a las presiones sobre los activistas sindicales y al ajuste en el empleo. En la primera de estas empresas, se conoció inmediatamente después del Golpe militar de 1976 que sus directivos querían ajustar la actividad productiva y el plantel de personal a una caída de la demanda, implementando una semana laboral de 40 horas y un

plan de retiros voluntarios, que en mayo ya había afectado a unos treinta operarios. La febril actividad sindical de los obreros, que venía desarrollándose desde los primeros días de marzo de ese año, en reclamo del pago atrasado de salarios y contra la conducción “burocrática” del sindicato, se interrumpió bruscamente el 24 de marzo.

Sin expresiones de violencia en la planta o sus adyacencias la producción volvió a la normalidad y el ausentismo disminuyó drásticamente en los próximos días. En un clima de derrota obrera, el Directorio de Metalúrgica Tandil neutralizó a la Comisión Interna y se deshizo de los delegados más comba- tivos presionando e induciendo renuncias a cambio de una compensación económica. La reducción de la semana laboral y del plantel de trabajadores, que en el pasado inmediato hubiera generado una reacción sindical con pa- ros y movilización, fue anunciada en un contexto de debilidad. Una situación parecida se vivía en Ronicevi. Aquí el activismo sindical era más reciente por- que había sido resistido por sus propietarios y también tenía componentes anti-burocráticos, debido a lo cual varios delegados habían sido blancos de represalias policiales y parapoliciales muy duras, que incluyeron secuestros, simulación de fusilamientos, detenciones y encarcelamientos prolongados, ya antes del Golpe militar. En ese contexto, los dos casos de sabotaje en Tandil aparecen como una forma de presión y protesta alternativas a las medidas de fuerza abiertas que ahora resultaban imposibles.

Las fuentes empresarias y policiales nos permiten documentar otros sabo- tajes en la industria del cemento, uno en Barker (partido de Benito Juárez) y otro en Olavarría, y en la del ladrillo elaborado a máquina, también en esta úl- tima ciudad. La mañana del 6 de abril de 1978, los directivos de Loma Negra Barker denunciaron a la policía un sabotaje contra el horno más importante de la planta; el motor eléctrico que lo impulsaba había sido averiado intencio- nalmente, provocando la paralización del 60% de la producción de cemento.⁹ En el informe policial se destaca que era difícil identificar a sus autores y sus móviles. Resultaba poco sensato atribuirlo a “elementos subversivos” externos a la empresa, por cuanto la hora del sabotaje no era propicia para ingresar a la misma sin llamar la atención ni habían causado todo el daño que era po- tencialmente posible; asimismo al investigador le parecía lejana la posibilidad que fuera una expresión de malestar, tratándose de un plantel obrero muy integrado al modelo paternalista de Loma Negra.

Pero en las actas sindicales de la época hay piezas que permiten reconstruir un contexto más complejo y proponer una interpretación alternativa. Pocos meses antes del sabotaje, el 15.12.1977, los directivos locales de la empresa anunciaron que eliminarían la guardia médica que funcionaba en la planta, la cual había sido instalada como resultado de una larga gestión sindical previa- mente al Golpe de Estado de 1976. La seccional local de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) denunció formalmente la medida en el Ministerio

de Trabajo, delegación Tandil, por violación de la ley de Higiene y Seguridad laboral (19.587). Como sucedía a menudo la denuncia no prosperó, la guardia médica fue cerrada y Loma Negra tomó represalias despidiendo a uno de los dirigentes sindicales; asimismo comenzó a rodar el rumor que haría lo mismo con otros dos miembros de la Comisión Directiva, por entonces de licencia gremial.¹⁰

El despido de los dirigentes sindicales era el punto culminante de un proceso de marginamiento del sindicato de las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, iniciado desde el Golpe de Estado. La mañana del 24 de marzo de 1976 el ejército ocupó las pequeñas localidades de Barker y Villa Cacique, donde estaban ubicadas la planta industrial y el local sindical. Las viviendas de dirigentes y delegados fueron allanadas, el local de AOMA fue clausurado y los militares dispusieron una guardia en la puerta de la fábrica. Esta presión tuvo un impacto social y psicológico mayor aquí que en Tandil, debido al reducido espacio urbano en que estaban concentrados los trabajadores y sus familias, y a que el ejército intervino al mismo tiempo en la actividad gremial, en el lugar de trabajo y en las viviendas obreras. La misma fue reforzada por la “limpieza”, a través de retiros voluntarios, de los delegados de fábrica que se habían mostrado más activos durante el período anterior al Golpe de Estado.

El sindicato debió limitarse a la administración de la obra social, aunque AOMA no había sido intervenida, y fueron suspendidas todas las actividades reivindicativas en la seccional, entre el 24.03.1976 y el mismo mes de 1977.¹¹ Loma Negra lo marginó a un lugar irrelevante de las relaciones laborales y sociales: no permitió participar de la adjudicación de viviendas para las familias obreras (un elemento clave de las prácticas empresarias paternalistas hacia su personal), no lo consultó sobre las directivas que afectaban al plantel obrero y rechazó, incluso ante la Justicia Laboral, la pertinencia de la representación gremial en su planta. No obstante ello, en Loma Negra Barker la oposición a las directivas empresarias fue realizada exclusivamente por los dirigentes de AOMA. En efecto, éstos expresaron su desacuerdo respecto a una serie de cambios en las condiciones de trabajo y en las relaciones contractuales, y su resistencia a los ataques contra la organización sindical, pero sin el apoyo de los trabajadores que seguían siendo sus afiliados.

En los primeros días de 1978, la situación pareció dar un vuelco favorable, como consecuencia de la entrevista que sostuvo la Comisión Nacional de los 25 (CN 25), entre quienes estaba el dirigente nacional de AOMA, Carlos Cabrera, y el Ministro de Trabajo, general Liendo. Este quería constituir un “interlocutor válido” en su relación con el mundo laboral, adoptando a la CN 25 como un representante legítimo y moderado de los trabajadores. Para ello estaba dispuesto a otorgarle una serie de privilegios, como negociar directamente con él la conformación de la delegación nacional a la asamblea de la OIT de ese año y cierto apoyo de los funcionarios de su área, incluidos los

interventores en la CGT, en su relación con las empresas. En respuesta a este gesto los dirigentes de AOMA Barker se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y ante las autoridades (militares) de la CGT para denunciar que tres de los miembros de la Comisión Directiva habían sido obligados a renunciar a su trabajo y a dejar el sindicato.¹² Argumentaron que se trataba de despidos encubiertos, injustificados y abusivos, e iniciaron una demanda ante la justicia laboral por violación del fuero sindical y reclamando la “doble indemnización”.

El mismo día que informaban al resto de la Comisión Directiva, que en Buenos Aires les habían prometido apoyo para denunciar cualquier “anormalidad” en la empresa, se produjo el sabotaje al horno de la planta de Barker. Este no es atribuible a los dirigentes sindicales, quienes todavía confiaban que sus gestiones permitirían “salvaguardar al obrero de la planta y darle seguridad de mantener el trabajo con garantías”, pero es posible que su autor pusiera más esperanza en este medio de presión para frenar los ataques de la empresa contra las conquistas obreras y contra el mismo sindicato que en la inoperancia del Ministerio de Trabajo, la moderación de la central de AOMA y las aventuradas gestiones ante la intervención militar de la CGT.

Los dos casos restantes de sabotajes documentados se produjeron en Olavarría, en sectores industriales diferentes pero casi al mismo tiempo, durante el mes de febrero de 1979. Uno de ellos afectó a la planta matriz de Loma Negra, situada en las afueras de dicha ciudad, que en ese momento transformaba uno de sus hornos para adoptar el sistema de producción de cemento llamado “vía seca”. En los informes empresarios y policiales se habla de una serie de acciones de sabotaje, extendidas en el tiempo, que habrían tenido como objetivo retrasar dicha transformación mediante daños en instalaciones eléctricas, electrónicas y mecánicas. La serie de atentados culminó con una avería importante, detectada el 18 de febrero, que paralizó la actividad del horno durante tres días.¹³ La vigilancia interna y la policial se combinaron y las sospechas se concentraron en el personal de varias empresas contratistas, que habían participado en la transformación del horno.

La sospecha sobre los trabajadores de las contratistas se fundaba, según la conjetura policial, en que éstas habían prometido un nivel de salarios que después no cumplieron y en que la prolongación de las obras en el tiempo favorecería a los temporarios que, en virtud de la urgencia de Loma Negra, cobraría horas extras. Hubo algunas detenciones e interrogatorios entre el personal de las contratistas, sobre las cuales no hay información en las fuentes. Al parecer la dirección que tomó la investigación dejaba al margen a los obreros y empleados de la planta permanente de Loma Negra, pero ¿cómo podía saber el personal de las contratistas dónde sabotear sistemas electrónicos complejos si no eran de la empresa ni tenían la calificación adecuada? Nuestra hipótesis es que los autores provenían de la planta estable y que los motivos para hacerlo

estaban relacionados a la intransigente negativa de la empresa ante los reclamos obreros y sindicales.

Hay tres episodios que ilustran esa política empresaria de marginar al sindicato y que llegó, incluso, a neutralizar a su personal obrero mediante la violencia y la coerción. Los describiremos brevemente a continuación:

1. Loma Negra, poco después del Golpe de Estado Loma Negra inició una política de “tercerización” de las secciones de mantenimiento, que pocos años más tarde replicaría en su filial de Barker, y reaccionó pidiendo el respaldo militar cuando el sindicato hizo manifiesta su protesta: tropas de infantería y tanques se apostaron amenazadoramente en la entrada de la planta.¹⁴

2. A partir del mes de mayo de 1976, la empresa decidió cambiar el tipo de bolsas que se usaban para envasar el cemento, debido a que la fábrica de bolsas FABI (localizada en proximidades de Olavarría) había disminuido su provisión por un reciente conflicto sindical.¹⁵ Este cambio tuvo consecuencias laborales, ya que el tamaño de las nuevas bolsas dificultaba a los “emboquilladores”, obreros dedicados a colocar las bolsas en la boquilla de una tolva de la que caía el material, mantener un ritmo acelerado de trabajo.¹⁶ Además era frecuente que el cemento desbordara la bolsa y quemara la piel de los trabajadores. Como consecuencia la producción cayó sensiblemente en la sección, los “emboquilladores” presentaron quejas por la situación a los capataces y reclamaron que una parte de las bolsas fueran del tipo fabricado por FABI, para mantener su ritmo de trabajo. El 15 de julio, ante la falta de respuesta, pararon la producción durante una hora; el jefe de personal de la empresa los denunció ante el Ministerio de Trabajo, que notificó a la Jefatura militar del Área 124 y se procedió a ordenar su arresto por vía policial (CELS et al., 2015). Estuvieron diez días detenidos en la Unidad del Servicio Penitenciario N° 7 de Azul, en la sección reservada a los “extremistas” y bajo malos tratos, hasta que un juez federal dictó la falta de méritos y la empresa, sin disculparse ni dar explicaciones consistentes, los reincorporó a sus puestos de trabajo.

3. El tercer episodio se relaciona con los reclamos sindicales por el deterioro del medio ambiente de trabajo. A fines de 1976, Mario Gubitosi, abogado laboral que asesoraba a AOMA Loma Negra y había iniciado cinco causas judiciales por insalubridad contra la empresa, fue detenido en la Unidad 7 de Azul, más tarde en una unidad local de la Marina y finalmente en el centro clandestino La Huerta, en Tandil. Gubitosi responsabilizó a la empresa ante la justicia por su arresto y posterior detención clandestina.¹⁷ Él, su sucesor, el Dr. Carlos Moreno, y los dirigentes sindicales habían investigado por qué muchos trabajadores de la sección Embolsado se retiraban antes de la jubilación por enfermedades no laborales y habían descubierto, al contrario de lo que certificaban los médicos de la empresa, una malformación de los pulmones atribuible al sílice que había en el aire. El sindicato denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo y ganó un juicio penal contra la empresa, que la obligaba

a cambiar la organización del trabajo y sus instalaciones, en función de mejorar la salubridad en dichas secciones. Estos cambios eran, económicamente, muy costosos y Loma Negra optó por transformar su sistema de producción adoptando el método de “vía seca” que le permitía reducir los costos en energía, el nivel de sílice en el ambiente y el costo en la mano de obra que hubiera requerido un turno más de trabajo y un equipo de relevos. El abogado Moreno, quien sucedió a su colega como asesor del sindicato, fue secuestrado por el ejército el 29.04.1977 a pocos metros de su casa en Olavarría, trasladado a un centro clandestino de detención en Tandil y finalmente asesinado cuando intentaba huir.¹⁸

Resumiendo, el sabotaje en Loma Negra Olavarría se parece curiosamente al que ya analizamos para su filial de Barker. Ante los ataques contra el sindicato, tanto de las fuerzas de seguridad como de la empresa, y la evidente impunidad con que la empresa eludía el fallo judicial y podía ejercer violencia contra su personal, el sabotaje se habría producido no solo como una forma de expresar el descontento sino también de evitar que se concretara la transformación en el método productivo. Si bien la producción por la “vía seca” podía justificarse por ser menos insalubre que la “vía húmeda”, vale recordar que de cumplirse el fallo del tribunal de justicia se hubiera ampliado la planta de personal, lo que también interesaba al sindicato. En ese sentido, y suponiendo que el sabotaje requería de un conocimiento preciso del punto clave de la instalación electrónica del horno, creemos que los autores del mismo no eran empleados externos sino miembros del personal estable de la empresa.

CONCLUSIONES

En este trabajo nos propusimos estudiar las formas de la resistencia obrera que se situaron en la “zona gris” entre la oposición y el consenso. Una motivación para hacerlo es el predominio, en la historiografía de los últimos treinta años, de la resistencia como equivalente de conductas activas, es decir como reacción, contragolpe o, al menos, defensa activa, y la presencia solo marginal o, en el mejor de los casos, puramente descriptiva de las actitudes pasivas de inconformismo o inadaptación al nuevo orden productivo, que establecieron en conjunto la última dictadura militar argentina y los empresarios. Un mayor interés en estas formas de resistencia puede apreciarse en textos recientes, en los cuales aquella es vista desde la perspectiva relacional del poder que ha propuesto Foucault en sus textos ya clásicos: el poder son relaciones de fuerza que producen a los sujetos, los dispositivos de poder prescriben conductas, adiestran los cuerpos y producen saberes.

Adoptarla no implica necesariamente aceptar una versión parcial, según la cual la resistencia es inmanente al poder y por consiguiente una relación de

fuerza que se opone activamente al poder dentro del orden productivo, una lucha que busca abrir los dispositivos disciplinarios, que los niega. Si lo hiciera no podría aprehender ni explicar las actitudes no consensuales, que surgen cuando las relaciones de fuerza por parte de las empresas son tan poderosas que debilitan la lucha, que desorganizan y debilitan el poder de los trabajadores. La resistencia solo como un contragolpe se vuelve invisible en contextos de alto nivel de represión y bajo nivel de organización. Asimismo, el carácter de la resistencia se vuelve difuso y ambiguo cuando lo buscamos desde esa perspectiva en espacios productivos organizados según programas de incentivos del trabajo, a través de diversos medios como las primas y otros, que tenían el consentimiento de los trabajadores, y en otros administrados según los principios y las prácticas del paternalismo industrial.

La historia de los trabajadores durante los períodos represivos tienen ante sí el desafío de ampliar el concepto de resistencia para incorporar las actitudes que, más allá de participar ocasionalmente en la construcción de un contrapoder, expresaban rechazo, desacuerdo y desobediencia de un modo “difuso”, alternando con acuerdos y consentimientos. Un conjunto de comportamientos situado en un ámbito cotidiano y anónimo, que está muy cerca de la “inadaptación” a las reglas del trabajo industrial y cuya naturaleza conflictiva ha sido poco apreciada por los estudios históricos, aunque deberían ser consideradas legítimamente como parte de la resistencia.

En la descripción y el análisis de algunas formas de la resistencia “difusa” privilegiamos los sabotajes. Los que pudimos reconstruir se registraron en establecimientos donde las comisiones internas y los cuerpos de delegados fueron desconocidos abierta o tácitamente por las empresas y advertidos brutalmente sobre su nuevo y limitado papel de administradores de las obras sociales por el ejército. Al mismo tiempo, el gobierno de facto eliminaba o suspendía las normas que habían permitido hasta entonces poner en práctica procesos de regulación, control y resolución de los conflictos. Resultado de ello, entre 1976 y 1979 desaparecieron las condiciones para la manifestación de los conflictos abiertos, que tenían algún reconocimiento institucional a través de un acuerdo formal o una práctica aceptada habitualmente. En esas circunstancias el sabotaje representaba una forma de conflicto no dirigido, es decir una alternativa a las otras formas señaladas, a través de la cual activistas en grupo o individualmente adaptaban sus acciones al cierre de los canales institucionales, formales e informales, que había posibilitado la intervención militar.

Para distinguir entre los sabotajes que significaban conflictos y los que representaban conductas no conflictivas, adoptamos el enfoque contextual que propusieron Edwards y Scullion (1987). En una mirada larga, los sabotajes a la producción o a las instalaciones fabriles tienen como antecedentes las experiencias de la denominada “resistencia peronista” y formaban parte de los repertorios de acción de la clase obrera argentina y de su propia experiencia.

Para el período 1976-1980, con cortes en los momentos de resurgimiento de la actividad sindical abierta, los sabotajes constituyeron una forma de protesta y de presión sobre las empresas, con el propósito en muchos casos de forzarlas a aceptar negociaciones con los representantes obreros. En ese sentido, el sabotaje se incrementaba ante un escenario con muy escasas posibilidades para la negociación y sobre todo con un panorama que significaba siempre la derrota de los reclamos obreros. Aparecía así como un intento de forzar la institucionalización del conflicto, es decir que a través de la presión buscaba que las empresas y el Estado reconocieran que el conflicto no era un hecho aberrante sino parte constitutiva de las relaciones laborales y, a partir de entonces, aceptarían formar parte de algún tipo de institución, formal o informal, que lo resolviera.

NOTAS

- ¹ Las referencias a este episodio y los temores y expectativas en el personal de la empresa provienen de las entrevistas que realizamos a varios trabajadores.
- ² Entre las dos regiones hay diferencias y semejanzas: la bonaerense fue de una industrialización temprana y la organización del trabajo de sus fábricas era más antigua que en las modernas plantas ubicadas a orillas del Paraná; en éstas la actividad político-sindical de las izquierdas había sido más extensa durante los primeros años setenta y, a pesar de la represión entre 1975 y 1977, se mantuvo cierta presencia clandestina a favor del sabotaje. Asimismo hay elementos comunes, que facilitan la comparación, como la política de descentralización salarial establecida por el gobierno militar, que transformaría a cada fábrica en el escenario privilegiado del conflicto laboral, y la estrategia patronal de mejorar la competitividad a costa de las conquistas obreras de los años anteriores y de la representación sindical en las plantas. Por otra parte hay un elemento metodológico común que es el acceso a fuentes históricas con mucho en común como son los archivos de la inteligencia policial de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.
- ³ Diario *La Tribuna*, Rosario, 9.02.1977.
- ⁴ *El Combatiente*, Año IX, 233, 15.09.1976.
- ⁵ PP, DI N° 3180/76 D2 260800, noviembre '76, Caja 50, 26.11.1976 (AMPSF).
- ⁶ PP, DI N° 40, Caja 55, 3.09.1977 (AMPSF).
- ⁷ PP, 240800, abril '78, Caja 56, 24.04.1978 (AMPSF).
- ⁸ Ver el editorial "Un arma de combate ¡SABOTAJE A LA PRODUCCIÓN!" de *El Combatiente*, 212, 14.04.1976. Que fue distribuido como panfleto en la puerta de algunas fábricas (DI N° 3.050, Caja 50, 21.05.1976). Ver también: *Evita Montonera*, 13, abril-mayo de 1976.

- ⁹ Comisión Provincial por la Memoria, Archivo DIPPBA, Mesa Ds, Carpeta Varios, Legajo N° 11.474 (en adelante: DIPPBA)
- ¹⁰ AOMA Barker, Actas de la Comisión Directiva, 15.12.1977, 10.01.1978 y 22.03.1978 (en adelante: AOMA).
- ¹¹ AOMA, 3.04.1976.
- ¹² AOMA, 22.03.1978.
- ¹³ DIPPBA, Mesa B, Carpeta 86, Legajo N° 88, folio 79.
- ¹⁴ Testimonio de Carlos Santiago, ex-secretario adjunto de AOMA Seccional Loma Negra, Olavarría, en el Documental *La sonrisa del Negro. Cemento y dictadura en Olavarría*, de Matías F. Moreno (2009).
- ¹⁵ Los propietarios de FABI habían denunciado a ocho delegados y obreros como subversivos, que fueron arrestados, torturados y reclusos durante varios meses.
- ¹⁶ Los “emboquilladores” de Olavarría, trabajando en equipo, habían llegado a las 53 bolsas por minuto, obteniendo premios por productividad.
- ¹⁷ Declaración de Mario Gubitosi, reproducida en *Tiempo Argentino*, 2.03.2012.
- ¹⁸ *Informe de la Comisión Especial por la Memoria*, Olavarría, 2001; disponible en [http://pparg.org/pparg/carceles/buenos_aires/olavarría/informe_olavarría].

BIBLIOGRAFÍA

- BARRAGÁN, Ivonne (2013): “‘Para el bien de la Nación’. Gestión militar de empresas estatales, prácticas de integración y represión de la fuerza de trabajo desde la perspectiva de caso. El Astillero Río Santiago, 1973-1976”, *Avances del CESOR*, Rosario, 10, pp. 57-72.
- BASCHETI, Roberto (2001): *Documentos 1976-1977. Golpe Militar y resistencia popular*, Vol. I, Buenos Aires, De la Campana.
- BURAWOY, Michael (1989): *El consentimiento en la producción. Los cambios del proceso productivo en el capitalismo monopolista*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- CARMINATI, Andrés (2011): “Conflictividad obrera durante la última dictadura militar en Rosario y el Cordón Norte del Gran Rosario. El otoño caliente de junio de 1977”. En DICÓSIMO, D. y SIMONASSI, S. (Comps.), *Trabajadores y empresarios en la Argentina del siglo XX: indagaciones desde la historia social*, Rosario, Prohistoria Ediciones.
- CELS, FLACSO y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2015): *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado*, Buenos Aires.
- DE CERTEAU, Michel (1996): *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*, México DF, Universidad Iberoamericana - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

- DICÓSIMO, Daniel (2015): “La resistencia de los trabajadores a la última dictadura militar. Un aporte a su conceptualización”, *Avances del CESOR*, Rosario, XII, 13, pp. 71-93.
- DICÓSIMO, Daniel (2007): “Indisciplina obrera en la industria metalúrgica durante el ‘Proceso de Reorganización Nacional’”, *Anuario del IEHS*, Tandil, 22, pp. 445-463.
- DICÓSIMO, Daniel y CARMINATI, Andrés (2013): “Sabotaje a la dictadura. Un estudio de las formas de sabotaje industrial durante la última dictadura militar en el Gran Rosario y el Centro Sudeste bonaerense (1976-1983)”, *Anuario IEHS*, Tandil, 28, pp. 257-278.
- EDWARDS, Paul y SCULLION, Hugh (1987): *La organización social del conflicto laboral. Control y resistencia en la fábrica*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- FALCÓN, Ricardo (1996): “La resistencia obrera a la dictadura militar (una reescritura de un texto contemporáneo a los acontecimientos)”. En QUIROGA, H. y TCACH, C. (Comps.), *A veinte años del golpe. Con memoria democrática*, Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones.
- FOUCAULT, Michel (2008): *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Madrid, Alianza.
- FOUCAULT, Michel (1989): *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, México DF, Siglo XXI.
- NOVARO, Marcos y PALERMO, Vicente (2003): *La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática*, Buenos Aires, Paidós.
- ORELLANA, Nicolás del Valle (2012): “Entre poder y resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault”, *Revista Enfoques*, X, 17, pp. 147-168.
- POZZI, Pablo (1988): *Oposición obrera a la dictadura*, Buenos Aires, Contrapunto.
- SCOTT, James (2004): *Los dominados y el arte de la resistencia*, México, Era.
- SIMONASSI, Silvia (2007): “Conflictividad laboral y políticas disciplinarias en la industria metalúrgica de la ciudad de Rosario, 1973-1976”, *Anuario IEHS*, Tandil, 22, pp. 465-486.